

EDITORIAL

DISTRITO 16: MENOS REPRESENTACIÓN PARA LOS TERRITORIOS QUE MÁS LA NECESITAN

La reciente actualización del mapa electoral, derivada del Censo 2024 y aplicada por el Servicio Electoral conforme a la Ley N° 18.700, vuelve a poner sobre la mesa un debate que Chile arrastra hace décadas. Esta vez, el impacto no es ajeno a la Región de O'Higgins: el Distrito 16 perderá un diputado a partir de 2030. Y lejos de ser un simple ajuste técnico, la medida expone una tensión estructural entre justicia demográfica y equidad territorial. El Distrito 16 no es cualquier territorio. Agrupa a comunas como San Fernando, Santa Cruz, Rengo, Chimbarongo, Nancagua, Placilla, Palmilla, Peralillo, Pumanque, Lolol, Marchigüe, La Estrella, Litueche, Pichilemu, Navidad, Paredones y Chépica. Se trata de una zona extensa, diversa y marcada por la ruralidad, donde conviven actividades agrícolas estratégicas, localidades costeras y centros urbanos intermedios. Es, en muchos sentidos, un reflejo profundo del Chile fuera de la capital.

Bajo esa realidad, la pérdida de un escaño no puede leerse únicamente desde la lógica de los números. El principio de proporcionalidad poblacional —base del redistritaje— es razonable y necesario. Pero aplicado sin matices en un país con profundas desigualdades territoriales, corre el riesgo de transformarse en un mecanismo que perpetúa esas mismas brechas.

Porque lo que muestran estas cifras no es solo una variación demográfica. También evidencian dinámicas más complejas: migración hacia la Región Metropolitana, menor dinamismo económico relativo y una histórica postergación en inversión y oportunidades. En ese contexto, reducir la representación parlamentaria del Distrito 16 puede terminar profundizando el problema: menos diputados implican menor capacidad de incidencia, menor visibilidad de las demandas locales y menos herramientas para revertir esas desigualdades.

Pero hay una dimensión aún más profunda que suele quedar fuera del debate. El centralismo en Chile no se explica únicamente por normas o fórmulas. Es también una cultura organizacional instalada en el Estado, en los

partidos políticos y en la toma de decisiones. Una cultura que tiende a concentrar poder, recursos y atención en Santiago, mientras los territorios —especialmente los más rurales— quedan en segundo plano.

Desde esa perspectiva, la reducción de un escaño en el Distrito 16 no es un hecho aislado. Es parte de una lógica que, aunque revestida de criterios técnicos, termina reforzando la concentración del poder político en las zonas más densamente pobladas. Y eso tiene consecuencias concretas: territorios más amplios con menos representantes, mayores dificultades para canalizar demandas locales y una voz más débil en el Congreso.

Resulta legítimo preguntarse si el actual sistema de representación está preparado para hacerse cargo de esta realidad. Mantener la proporcionalidad como eje es correcto, pero no debiera ser el único criterio. Factores como la extensión territorial, la dispersión poblacional, la ruralidad y las características productivas debieran tener un peso real en la configuración del mapa electoral.

El caso del Distrito 16 es ilustrativo. Reducir su número de representantes implica aumentar la carga sobre quienes permanezcan, en un territorio donde las distancias no son menores y las necesidades son múltiples. No es lo mismo representar comunas densamente pobladas y concentradas que abarcar un territorio amplio, diverso y con brechas históricas.

Este no es un debate menor ni coyuntural. Es una oportunidad para repensar el modelo de representación política en Chile. Para avanzar hacia un equilibrio que no solo cuente habitantes, sino que también reconozca territorios. Para entender que la calidad de la democracia no se mide únicamente en cifras, sino en la capacidad real de todas las zonas del país de hacerse escuchar.

Porque cuando territorios como los del Distrito 16 pierden representación, lo que está en juego no es solo un escaño. Es la posibilidad de incidir, de visibilizar sus problemáticas y de construir desarrollo desde sus propias realidades. Y ese es un costo que, como región, no debiéramos seguir aceptando en silencio.